



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020)

Medio de control: Ejecutivo
Radicado: 15001 33 33 010 **2019 00244 00**
Demandante: Luz Marina Zambrano Sandoval
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Procede el Despacho a pronunciarse sobre el mandamiento de pago promovido por la señora Luz Marina Zambrano Sandoval contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

I. ANTECEDENTES

La parte demandante solicitó se libre mandamiento de pago contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a favor de Luz Marina Zambrano Sandoval, por los siguientes conceptos¹:

“1. Por la suma de **UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$1.188.561)**, POR CONCEPTO DE LA DIFERENCIA DE LAS **MESADAS PENSIONALES** COMO CAPITAL DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA (S) SENTENCIA (S) QUE SIRVEN COMO TÍTULO EJECUTIVO.

2. Por la suma de **SETECIENTOS NUEVE PESOS (\$709)**, POR CONCEPTO DE LA DIFERENCIA DE LA INDEXACIÓN DESDE LA EFECTIVIDAD (12 DE JUNIO DE 2011) HASTA LA EJECUTORIA (5 DE JUNIO DE 2015).

3. Por la suma de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS (\$1.451.290)**, POR CONCEPTO DE LOS INTERESES MORATORIOS CAUSADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA EJECUTORIA (6 DE JUNIO DE 2015) HASTA EL DÍA DEL PAGO PARCIAL (ABRIL DE 2017).

4. Por la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$286.982)**, POR CONCEPTO DE LAS **COSTAS** DEL PROCESO ORDINARIO.

5. Por la suma de **SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$728.851)**, POR CONCEPTO DE LOS INTERESES MORATORIOS CAUSADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL PAGO PARCIAL (AGOSTO DE 2018) (sic) HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.

¹ F.1

6. *Por el valor de los intereses moratorios que se causen sobre la suma relacionada en el numeral primero desde el día de presentación de la demanda hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación.*

7. *Se condene en Costas y Agencias en Derecho a la parte demandada, del presente proceso ejecutivo.”*

La demanda fue repartida inicialmente ante el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, quien, mediante auto de 27 de febrero de 2020 (f. 39), dispuso su remisión por competencia ante este Despacho judicial, por haber proferido la sentencia que sirve de título para la presente ejecución.

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

- Competencia

En los términos de los artículos 104 numeral 6.º y 297 del CPACA, este Juzgado es competente para conocer de la presente ejecución, toda vez que se demanda por vía ejecutiva el valor de la condena contenida en sentencia de 13 de junio de 2014 (fs. 11 y 12), proferida por este Despacho judicial en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 15001 3331 004 2013 00179 00, confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá con sentencia del 1 de junio de 2015, y que cobró ejecutoria el 5 de junio de 2015 (f. 19 vto.). De otro lado, en virtud del numeral 7.º del artículo 155 *ejusdem*, este Despacho es competente para conocer de esta demanda en razón de la cuantía, al encontrar que la misma no supera la suma de mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (fs. 1 vto. y 2).

- Caducidad

La demanda fue interpuesta dentro de la oportunidad legal que corresponde, de conformidad con lo señalado en el literal k numeral 2 del artículo 164 del CPACA, por cuanto la sentencia cobro ejecutoria el **5 de junio de 2015** (f. 19 vto.), y una vez transcurrieron los diez (10) meses de que trata el artículo 195 del CPACA, se advierte que no operó el término de la caducidad de los cinco años de que trata la norma, pues la acción ejecutiva fue promovida el **9 de diciembre de 2019 (f. 37)**.

- Del título ejecutivo

En los términos del artículo 297 del CPACA constituyen título ejecutivo para esta jurisdicción, entre otros documentos, los siguientes:

“Artículo 297. Título ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. *Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.*
(...)”

Con relación al contenido del título ejecutivo, el artículo 422 del Código General del Proceso dispone:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señálela ley....”.

A su turno, el Consejo de Estado señaló que el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil (hoy artículo 422 del CGP), estableció las condiciones formales y de fondo que debe reunir el título ejecutivo, las primeras, en el sentido que los documentos integrantes del título conformen una unidad jurídica, es decir, que sean **auténticos**, y que emanen del deudor o de su causante; **de una sentencia de condena proferida por el juez** o tribunal de cualquier jurisdicción, de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, **de las providencias que en procesos contencioso administrativos** o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia; las segundas, por su parte, buscan que en los documentos que sirven de base para la ejecución aparezcan consignadas obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, y que sean líquidas o liquidables por simple operación aritmética, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero.²

Bajo las anteriores precisiones, cuando la obligación proviene de una sentencia judicial debe integrarse el título ejecutivo complejo con la copia de la respectiva providencia judicial y su constancia de ejecutoria, así como aquellos documentos que contengan la obligación clara, expresa y exigible. Cuando se ejecuta, entonces, con fundamento en un título ejecutivo complejo, es indispensable que todos y cada uno de los documentos que lo conforman, en su conjunto, evidencie la existencia de la obligación con las características previstas en el artículo 422 del CGP, y sean aportados en legal forma para poder librar mandamiento de pago.

En este caso, tenemos que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja dictó sentencia condenatoria de primera instancia el 13 de junio de 2014, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 15001 3331 004 2013 00179 00, confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante providencia de 1 de junio de 2015 (fs. 13 a 19), la cual cobró ejecutoria a partir de las cinco de la tarde (05:00 p. m.) del 5 de junio de 2015, según constancia secretarial (f. 19 vto.), y que indica que todos los documentos son copias auténticas.

También conforman el título ejecutivo complejo, los siguientes documentos:

- Copia de la Resolución N° 00710 de 24 de enero de 2013 expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por la cual se

² Consejo de Estado, C.P. María Elena Giraldo Gómez, auto de 16 de septiembre de 2004, radicado bajo el número 26.726

reconoce y ordena el pago de una pensión de jubilación por cuotas partes (fs. 5 a 9).

- Copia del certificado de factores salariales para los años 2010 y 2011 (f. 10).
- Copia de la solicitud de cumplimiento de la sentencia de 31 de agosto de 2015 elevada por el demandante, por intermedio de su apoderado judicial (fs. 27 y 28).
- Copia de la Resolución N° 00804 de 9 de noviembre de 2016 expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por la cual se ajusta una pensión de jubilación en cumplimiento de una sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja, confirmado por el Tribunal Administrativo de Boyacá (fs. 29 a 33).

De lo anterior, se puede extraer que el título ejecutivo base de la acción es un título complejo, y que reúne las **condiciones formales** ya señaladas, de conformidad con el artículo 297 numeral 1.° de la Ley 1437 de 2011, pues, además de aportarse de manera completa el título que da origen a la obligación, se verifica que la entidad llamada a responder es la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En este punto, corresponde examinar si los documentos aportados reúnen los requisitos de **fondo**, que hacen relación a la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, en tanto que el mandamiento de pago solo procederá cuando los documentos anexados para el recaudo ejecutivo no dejan duda al juez de instancia, de la existencia de la obligación que se dice incumplida, dada su claridad, su condición de expresa y su exigibilidad.

Respecto al requisito de **claridad** de la obligación exigido por el artículo 422 del CGP, es pertinente advertir que una obligación es ejecutivamente clara, porque en el documento constan todos los elementos que la conforman o le dan entidad, es decir, se conoce quién es el deudor, quién el acreedor y lo debido, esto es, el objeto de la prestación cuya satisfacción se reclama; se trata de una obligación **expresa**, o sea enunciada de modo inconfundible, en el documento que sirve de título, y **exigible**, porque no está sujeta a plazo o condición, lo que permite reclamar su cumplimiento.

En el caso concreto, los documentos que hacen parte del título ejecutivo indican la existencia de una obligación a favor de la ejecutante y a cargo de la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, originada en la sentencia emitida primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja, confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 15001 3331 004 2013 00179 00, en el siguiente sentido:

“TERCERO.- Como consecuencia, la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, reliquidará y pagará a la señora LUZ MARINA ZAMBRANO SANDOVAL, identificada con C.C. No. 24.048.068 de Santa Rosa de Viterbo (Boy.), la pensión de vejez con los reajustes anuales de ley desde

el 13 de junio de 2011, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios **comprendido entre el 13 de junio de 2010 y el 12 de junio de 2011**, reclamados a través del presente medio de control, es decir, Asignación básica, Prima de Vacaciones, Prima de Navidad y Horas Extras, según lo expuesto en esta providencia. Se deberá aplicar el monto del setenta y cinco por ciento (75%) a la asignación pensional.

CUARTO.- La suma que deberá cancelar la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**, por concepto de reliquidación de la pensión de jubilación a pagar, se actualizará de acuerdo con lo señalado en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTO.- Sobre los nuevos factores a tener en cuenta para el reconocimiento de la liquidación de la pensión de jubilación reconocida a la señora **LUZ MARINA ZAMBRANO SANDOVAL**, la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**, deberá realizar los descuentos por concepto de aportes destinados para el Sistema de Seguridad Social en Salud que corresponden a la trabajadora. Así mismo, sobre los nuevos factores a tener en cuenta en la respectiva liquidación de la pensión, deberán realizarse los descuentos por concepto de los aportes que no se hubieran efectuado al Sistema General de Pensiones, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones.

SEXTO.- Condénese en costas a la parte demandada. Liquéndose por secretaría.

SÉPTIMO.- Fíjese como agencias en derecho la suma de Doscientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Veintiún Pesos con Nueve Centavos (\$ 267.621.09) M/cte, a cargo de la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”

La sentencia de segunda instancia dispone:

“PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja de fecha 13 de junio de 2014, que accedió a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte accionada, en virtud a que no prosperó el recurso de apelación. El a quo procederá a su liquidación de conformidad con lo previsto en el artículo 366 del C.G.P.

TERCERO. FIJAR como agencias en derecho a cargo del recurrente, la suma de \$267.621,09 pesos m/cte. Que corresponde al 3% de las pretensiones de la demanda (\$8.920.703 pesos m/cte.)”

De lo anterior, se advierte que en la sentencia se imputa a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio una obligación clara y expresa, ya que la referida sentencia aunque fue proferida en abstracto, es liquidable mediante una operación matemática.

En cuanto a su exigibilidad, es pertinente señalar que el plazo aplicable es el contemplado en el título base de reclamación en los términos del artículo 192 del CPACA, el cual prevé que las condenas a entidades estatales serán cumplidas en un plazo máximo de 10 meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. En este orden y comoquiera que la decisión en mención cobró ejecutoria el 5 de junio de 2015 (f. 19 vto.), los diez (10) meses de que trata la norma en mención se cumplieron el 5 de abril de 2016. Por tanto, al momento de presentación de la demanda, esto es, el 9 de diciembre de 2019 (f. 37) este plazo se encontraba superado, sin que hubiera caducado la acción. Estas razones llevan a colegir que la obligación contenida en el título ejecutivo complejo cumple también con el requisito de ser exigible actualmente.

Corolario de lo expuesto, considera este Juzgado que de los documentos aportados como base de la presente ejecución, es posible predicar su idoneidad como título ejecutivo, toda vez que reúnen las exigencias contempladas en el artículo 422 del CGP, siendo procedente librar el mandamiento de pago solicitado, en tanto que los documentos anexados para el cobro judicial no dejan duda en el juez de instancia, de la existencia de la obligación que se dice incumplida, dada su claridad y su condición de expresa, además de su exigibilidad.

- **Del mandamiento de pago**

En este contexto, el artículo 430 del Código General del Proceso establece al respecto:

"ART. 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste merito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente o en la que aquel considere legal..."

Conforme a la redacción de la norma, el juez debe librar el mandamiento de pago, cuando se acompañe con la demanda, el documento idóneo completo que sirva de fundamento para la ejecución. En ese orden de ideas, se librará el mandamiento de pago, según lo sostenido por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, respecto a las opciones que tiene el juez frente a la demanda ejecutiva, en los siguientes términos:

"En otras palabras, frente a la demanda ejecutiva el juez tiene tres opciones:

- 1) **Librar mandamiento de pago cuando los documentos aportados con la demanda contienen una obligación clara, expresa y exigible, esto es, constituyen título ejecutivo.***
- 2) Negar el mandamiento de pago porque junto con la demanda no se aportó el título.*
- 3) Disponer la práctica de las diligencias previas solicitadas en la demanda ejecutiva que cumplan los supuestos legales (art. 489 C. de P.C.), las cuales, una vez cumplidas, conducen al juez a proferir el mandamiento de pago si*

fueron acreditados los requisitos legales para que exista el título ejecutivo, o negarlo en caso contrario.”³

Ahora bien, a efecto de establecer si las sumas señaladas como pretensiones en la demanda, corresponden a los montos adeudados por la entidad respecto a los cuales es procedente librar mandamiento de pago a favor de la señora Luz Marina Zambrano Sandoval contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, atendiendo la condena impuesta en la sentencia dictada dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 15001 33-33-004-2013-00179-00, el Despacho procede a realizar el estudio de los montos reclamados en los siguientes términos:

Como consideración previa, se tendrá que la ejecutante no discute la reliquidación hecha por la entidad demandada en la Resolución 008094 de 9 noviembre de 2016, sino que reclama el pago de dineros adeudados por concepto de capital, indexación y los intereses moratorios, causados entre el 13 junio de 2011 y el 5 de junio de 2015; los intereses moratorios generados sobre el saldo de capital adeudado hasta cuando se realice el pago total de la obligación, así como las costas y agencias en derecho tasadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ahora bien, la sentencia de 13 de junio de 2014, confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 1 de junio de 2015, ordenó ajustar la pensión de la accionante incluyendo los factores devengados en el año de consolidación del status, es decir, el período comprendido entre el 13 de junio de 2010 y el 12 de junio de 2011, de tal manera que a los factores ya reconocidos se adicionará la prima de navidad y las horas extras, a partir del 13 de junio de 2011.

Revisado el acto administrativo con el que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ajustó a derecho la mesada pensional del accionante - **Resolución N° 008094 de 9 noviembre de 2016** - (fs. 29 a 33), se observa la liquidación correspondiente, en la que se tuvieron en cuenta como factores salariales, los siguientes:

FACTORES SALARIALES	VALOR
Asignación básica	\$2.384.601
Horas extras	\$ 27.289
Prima de vacaciones	\$97.961
Prima de navidad	\$203.272
Ingreso base de Liquidación	\$2.713.122
IBL 75%	\$ 2.034.842

De acuerdo a lo anterior, calculó la mesada reliquidada efectiva a partir del 13 de junio de 2011, en la suma de \$ 2.034.842. En igual sentido, en virtud de los efectos otorgados por la providencia objeto de recaudo, se reconoció por concepto de mesadas atrasadas, por la diferencia entre el valor de la mesada pagada y el valor de la nueva mesada, el valor de \$13.281.261 desde el 13 de junio de 2011 al 1 de noviembre de 2016, fecha en la que la entidad ejecutada realiza la liquidación de lo

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez, expediente 13103.

ordenado en el fallo. Por conceptos de indexación desde el 13 de junio de 2011 al 5 de junio de 2015, la suma de \$ 610.052; por intereses moratorios desde el 5 de junio de 2015 al 30 de noviembre de 2016, el valor de 3.287.904 y por agencias en derecho reconoció el valor de \$267.621.

En la demanda se cuestionó esa liquidación al señalar que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagó un valor inferior al que debía ser cancelado, por lo que se tiene un pago parcial de la obligación, así:

Diferencia mesadas	\$14.469.822
Intereses moratorios	\$4.739.194
Indexación	\$610.761
Descuentos por salud	\$-1.736.379
Costas y agencias en derecho	\$554.243
Subtotal liquidación	\$20.374.020
Pago parcial	\$18.637.641
TOTAL A FEBRERO DE 2018	\$2.784.915

Asimismo, señaló que se le adeudan los intereses moratorios generados desde el día siguiente al pago parcial de la obligación y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago total por un valor de \$728.851 (calculado a 30 de noviembre de 2019).

De acuerdo a las órdenes impartidas en el título, que fueron descritas con antelación, el Despacho considera que no le asiste razón a la parte demandante, por cuanto, de una parte, no discriminó en su liquidación los intereses moratorios a la tasa DTF y a la tasa comercial, atendiendo a los plazos establecidos en el artículo 195 del CPACA; de otra, el título complejo, únicamente, da cuenta de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible respecto a las diferencias de las mesadas, indexación e intereses moratorios, mas no se hace extensivo a las costas y agencias en derecho fijadas en el proceso declarativo base de recaudo, pues no se allegó copia auténtica de la liquidación efectuada por la Secretaría del Juzgado ni del auto que aprobó la misma. Así las cosas, no hay lugar a librar el mandamiento de pago conforme a lo solicitado por el demandante; no obstante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 430 del Código General del Proceso, el juez librará mandamiento ejecutivo en la forma que lo considere legal.

En este sentido, el Tribunal Administrativo de Boyacá indicó que *“la función del operador jurídico se extiende a analizar el control de legalidad de la petición, máxime si la sentencia objeto de ejecución contiene una condena en abstracto.”* Advirtiendo, además, que los procesos ejecutivos adelantados ante esta jurisdicción no sólo buscan garantizar el pago de una acreencia, también deben propender por la protección del erario a través de un control estricto que impida el menoscabo injustificado de aquel.⁴

Con apoyo de la contadora adscrita a la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Boyacá, se realizó la revisión contable y liquidación financiera de las sumas que provienen del título judicial objeto de recaudo, y, en consecuencia, de la liquidación

⁴ Providencia de 26 de abril de 2018, Radicación: 15001-3333-006-2016-00029-01, MP Clara Elisa Cifuentes Ortiz.

que se anexa y que forma parte integral de la presente providencia, se extrae lo siguiente:

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CREDITO A FECHA 30/04/2018	LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA	VALORES PAGADOS INDICADOS EN LA DDA Y RES.08094	DIFERENCIA
DIFERENCIA EN MESADAS	\$14.415.840	\$13.281.261	\$1.134.579
(-) DESCUENTOS DE SALUD	\$(1.729.901)	\$(1.593.751)	\$(136.150)
(+) INDEXACION	\$639.591	\$610.052	\$29.539
TOTAL CAPITAL A FECHA 30/03/2017 (mes hasta donde se causaron diferencias)	\$13.325.530	\$12.297.562	\$1.027.968
TOTAL INTERES MORATORIO DESDE EL 6/06/2015 HASTA EL 30/04/2017	\$4.049.314	\$3.287.904	\$761.410

Ahora, teniendo en cuenta que existe un saldo de capital —\$1.027.968—, es evidente que este continuó generando intereses moratorios al 1.5 de la tasa comercial desde la fecha de pago parcial y los causará hasta la fecha del pago total de la obligación. Los cuales a la fecha de la presentación de la demanda corresponden a la suma de \$704.626. Por consiguiente, las sumas por las que se libraré mandamiento de pago son las siguientes:

RESUMEN LIQUIDACION	
SALDO CAPITAL A 30/04/2017	\$1.027.968
SALDO INTERES MORATORIO A 30/04/2017	\$761.410
INTERES MORATORIO CAUSADO DESDE EL 01/5/2017 HASTA EL 30/11/2019	\$704.626
TOTAL LIQUIDACION A FECHA 30/11/2019	\$2.494.004

- **De la solicitud de medida cautelar**

La parte demandante solicitó que se ordene el embargo y retención de dineros que la Nación - Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con NIT No 860525148-5, posee en el Banco BBVA – Sucursal Bogotá D.C. Por lo tanto, de manera previa a resolver sobre dicha medida, y en aplicación del parágrafo del artículo 594 del CGP⁵, el Despacho solicitará a la(s) entidad(es) bancaria(s) en mención que certifique(n) la existencia de productos financieros a nombre de la demandada, y en la que conste número(s) de cuenta(s); si se trata de cuenta(s) activa(s) y el saldo actual, así como su naturaleza referente a la procedencia y destinación de los dineros allí depositados. De acuerdo con lo anterior, se oficiará a la(s) entidad(es) bancaria(s) señalada(s) por el ejecutante, con el fin que obtener la información en mención.

Por tratarse de un proceso híbrido, dentro de la carpeta del proceso ubicada en el estante electrónico del Juzgado, Secretaría creará una subcarpeta que albergue separadamente las medidas cautelares.

⁵ “Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables”

Por lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja

RESUELVE:

PRIMERO.- Librar mandamiento de pago a favor de la señora Luz Marina Zambrano Sandoval, y en contra de la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las siguientes sumas de dinero:

1. Por la suma de **un millón veintisiete mil novecientos sesenta y ocho pesos (\$1.027.968) M/Cte.**, por concepto de saldo de capital —diferencias de mesadas e indexación— ordenados en la sentencia proferida por este Juzgado el día 13 de junio de 2016 (fs. 11 y 12), proferida por este Despacho judicial y confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá con sentencia del 1 de junio de 2015, dentro del proceso radicado No. 15001 33 31 004 2013 00179 00.
2. Por la suma **setecientos sesenta y un mil cuatrocientos diez pesos (\$761.410)** por concepto de intereses moratorios generados desde 5 de junio de 2015, —fecha de ejecutoria de la sentencia, hasta el 30 de abril de 2017, —día del pago parcial efectuado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio—
3. Por la suma de cuatro millones **setecientos cuatro mil seiscientos veintiséis pesos (\$704.626)** por concepto de intereses moratorios causados desde el día siguiente al pago parcial —1.º de mayo de 2017 hasta la fecha liquidada en la demanda —30 de noviembre de 2019, y los que continúen generando hasta la fecha en que se produzca el pago total de la obligación.

SEGUNDO.- No librar mandamiento de pago por concepto de costas y agencias en derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO.- Notificar personalmente esta providencia al representante legal de la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho Judicial y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con los artículos 197 y 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto. Se anexará copia digitalizada de la demanda y de sus anexos, asimismo, de esta providencia.

CUARTO.- Notificar esta providencia a la parte demandante y a su apoderado(a), de conformidad con el artículo 201 del CPACA.

QUINTO.- Advertir a la parte demandada que dispone del término de cinco (5) días para que efectúe el pago de la obligación, según lo establecido en el artículo 431 del CGP, y de diez (10) días para proponer excepciones, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 442 *ibídem*. Dichos términos comenzarán a correr veinticinco (25) días después de surtida la notificación prevista en el art. 199 del CPACA.

SEXTO.- Reconocer personería al abogado Henry Orlando Palacios Espitia, identificado con C.C. 7.160.575 y T.P. 83.363 del C. S. de la J., para actuar como apoderado de la ejecutante, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 5 del expediente.

SÉPTIMO.- Los apoderados y demás sujetos del proceso, en adelante y durante la vigencia del Decreto 806 de 2020, deberán hacer uso de los medios tecnológicos y virtuales. Por lo tanto, deberán enviar a través de los canales digitales informados por las partes un ejemplar de todos los memoriales en formato PDF o de las actuaciones que realicen de manera simultánea con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial.

Los memoriales y actuaciones dirigidos al Despacho se remitirán al buzón del correo electrónico: correspondenciajadmtun@cendoj.ramajudicial.gov.co

OCTAVO.- Por Secretaría, de manera previa a resolver la petición de medida cautelar, **oficiar** al Banco BBVA – Sucursal Bogotá D.C., para que dentro del término de diez (10) días, a partir del recibo de la comunicación respectiva, se sirva(n) certificar la existencia de productos financieros de los cuales sea titular Nación - Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con NIT No 860525148-5, o aquel que corresponda con la entidad ejecutada. Adicionalmente, hará(n) constar el número y clase de cuenta o producto, denominación, estado actual, fecha de última actividad y saldo. Por último, de ser posible, señalará(n) el origen y destinación de los recursos manejados en dichos productos financieros. **Se advertirá** a la(s) entidad(es) requerida(s) que de no suministrar la información de manera oportuna, podrán ser sancionadas, según lo expuesto en el artículo 44 del CGP.

Por tratarse de un proceso híbrido, dentro de la carpeta del proceso ubicada en el estante electrónico del Juzgado, **crear** una subcarpeta que albergue de manera separada las medidas cautelares.

NOVENO.- La parte ejecutante deberá remitir el(los) oficio(s) elaborado(s) por Secretaría a la(s) entidad(es) requerida(s), dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoria del presente auto. Durante el mismo término, deberá acreditar su remisión o radicación para que obre en el expediente.

Notifíquese⁶ y cúmplase

6

**Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad
del Circuito de Tunja**

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

La anterior providencia se notifica por
estado electrónico N.º 31
de hoy 9 de octubre de 2020, a las 8:00 a.m.

FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
Secretario

Firmado Por:

**ANGELA MARIA JOJOA VELASQUEZ
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE TUNJA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

e8aaf024c58705bc9008bd99b1dbdaef8c55485a909dded3a431e4b2932a7e56

Documento generado en 08/10/2020 04:44:44 p.m.